

13 y 14
NOVIEMBRE

2025

PRESENCIAL
Y ONLINE



23.ª JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, LABORALES Y AGROPECUARIAS

Compromiso profesional en tiempos de transformación.

Titulo

Estrategias de planificación fiscal, financiera, societaria y de gestión hacia una rentabilidad sustentable en el sector agropecuario.

Área

Agropecuaria

Tema

Algunas cuestiones de planificación fiscal vinculadas al Convenio Multilateral en el Agro

Autores

Di Paolo, Horacio. Matricula Nº 10285 CPCE Santa Fe C II

Mangiarelli, Mariana. Matricula Nº 18228 CPCE Santa Fe C II

RESUMEN

El trabajo aborda algunas cuestiones de planificación fiscal en el sector agropecuario vinculadas con la aplicación de las normas del Convenio Multilateral (CM), instrumento que distribuye la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre distintas jurisdicciones provinciales en las que el contribuyente desarrolla su actividad.

Se analiza en particular el tratamiento del concepto “materia prima” dentro del cálculo del coeficiente de gastos previsto por el régimen general del artículo 2 de CM, y su impacto en actividades de producción primaria y en aquellas de carácter mixto, que combinan etapas primarias e industriales.

El estudio se centra en la causa “Avícola Telos S.A. c/ Provincia de Buenos Aires” (R. CA11/2021), donde se debatió si ciertos insumos utilizados en la producción de huevos —como alimentos balanceados, productos veterinarios y otros— podían considerarse gastos computables o si correspondía otorgarles el tratamiento de materia prima no computable, propio de la actividad industrial.

La Comisión Arbitral concluyó que estos insumos no se incorporan físicamente al producto final, por lo que no constituyen materia prima en los términos del Convenio.

Asimismo, se analiza el precedente “Marolio S.A. C/ CABA (R. CP 9/2025), en el que se discutió la atribución de ingresos entre jurisdicciones, introduciendo el debate sobre el destino final de los bienes y la posibilidad de utilizar los coeficientes declarados por los clientes del contribuyente como parámetro de distribución.

En conjunto, ambos fallos permiten reflexionar sobre las dificultades de aplicación del Convenio Multilateral al ámbito agropecuario y sobre la necesidad de avanzar hacia criterios interpretativos uniformes que aseguren un tratamiento fiscal equitativo y previsible entre las distintas jurisdicciones.

Algunas cuestiones de planificación fiscal vinculadas al Convenio Multilateral en el Agro

1. Introducción

El Convenio Multilateral tiene como propósito distribuir la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de un sujeto que resulta ser contribuyente del tributo en más de una jurisdicción. En este marco, el texto del Convenio prevé la distribución por medio de un régimen general (artículo 2) y varios regímenes especiales (artículos 6 a 13).

Para que una jurisdicción participe de la distribución de la base imponible se deberá verificar en ella el concepto de “sustento territorial”. Este requisito se tiene por cumplido cuando el contribuyente incurra en un gasto vinculado con sus actividades. El gasto constituye la medida de las actividades desplegadas por el contribuyente en una jurisdicción. En este sentido, señala el último párrafo del artículo 1° del Convenio Multilateral que “Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio”.

A los efectos de distribuir la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los sujetos alcanzados por el Régimen General deberán confeccionar un coeficiente siguiendo los lineamientos indicados en el artículo 2 del texto. Indica esta disposición que “Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma: a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción, b) El cincuenta por ciento (50%) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencia u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etcétera, con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º, deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios”.

En el presente trabajo nos proponemos analizar el concepto de “materia prima” y su encuadre como gasto en los términos del coeficiente de gastos del Régimen General. En particular, analizaremos la R. (CA) 11/2021 dictada en el caso concreto recaído en causa Avícola Telos SA c/ Provincia de Buenos Aires¹.

Además resulta de importancia repasar las conclusiones del caso concreto Marolio SA C/ CABA donde se discutió la asignación de los ingresos a una jurisdicción para la confección del coeficiente de ingresos del Régimen General².

¹ R. (CA) 11/2021, 05/05/2021.

² R. (CP) 9/2025, 12/06/2025.

2. Capítulo I- Análisis de los casos propuestos

2.1 Avícola Telos SA

2.1.1 Clasificación de los gastos para confeccionar el coeficiente del Régimen General: Gastos Computables y no computables

Expresa el artículo 3 del texto del Convenio que “Los gastos a que se refiere el artículo 2°, son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad. Así, se computarán como gastos los sueldos, jornales y toda otra remuneración, combustibles y fuerza motriz, reparaciones y conservación, alquileres, primas de seguros y en general todo gasto de compra, administración, producción, comercialización, etcétera. También se incluirán las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias. No se computarán como gastos: a) El costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado; b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización; c) Los gastos de propaganda y publicidad; d) Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones, recargos cambiarios, derechos, etcétera); e) Los intereses; f) Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que excedan del uno por ciento (1%) de la utilidad del balance comercial”.

Como podemos observar, la citada norma obliga al contribuyente a clasificar los gastos en que incurre en dos grupos: a) Los computables a los efectos de confeccionar el coeficiente, b) Los no computables, es decir aquellos que el contribuyente deberá dejar de lado a la hora de elaborar el coeficiente de gastos previsto en el artículo 2°.

Antes de seguir con nuestro objetivo planteado, debemos señalar que la enumeración de gastos “no computables” detallados en el artículo 3 del Convenio es de carácter ejemplificativa³. Ello debido a que los Órganos de aplicación del Convenio han interpretado que otros gastos no expresados taxativamente en la norma también revisten el carácter de “no computables”. También es importante expresar que esta afirmación no es sostenida por la Comisión Arbitral, quien oportunamente señaló que “del artículo 3° del Convenio Multilateral surge que si un gasto no está expresamente nominado en ninguna de las dos categorías que menciona –gastos computables y gastos no computables–, debe considerarse computable. Ello, por cuanto los primeros se citan a título enunciativo –“así se computarán”– mientras que los segundos se mencionan en forma taxativa– “no se computarán”–, es decir que mientras se utiliza la forma imperativa para estos últimos, se recurre a una forma indicativa para los computables”⁴.

Así, por ejemplo, ha indicado la Comisión Arbitral que los siguientes conceptos (que no están enunciados en el artículo 3 como gastos “no computables”) deben ser encuadrados como “gastos no computables”:

³ Di Paolo, Horacio. Convenio Multilateral. La materia prima como gasto no computable para la confección del coeficiente del régimen general del Convenio Multilateral. Errepar Errepar PIC, 07/2021.

⁴ R. (CA) 5/2016, 17/02/2016.

Gastos comunes vinculados a exportaciones⁵;

Valor patrimonial proporcional negativo⁶;

Diferencias de cambio negativas⁷;

Deudores incobrables⁸.

Luego de repasar cada uno de estos conceptos nos preguntamos si es correcta la afirmación de la Comisión Arbitral, en cuanto a que los “gastos no computables” están enunciados en forma taxativa en el texto del Convenio Multilateral.

Veamos entonces seguidamente cómo debemos interpretar el artículo 3, inciso a), el cual detalla que “el costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales” reviste el carácter de gasto “no computable” para el cálculo del coeficiente del régimen general.

2.1.2 Materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales. Materia prima adquirida a terceros destinada a la producción primaria

Conforme indica el texto del Convenio Multilateral, resulta un gasto no computable a los efectos del coeficiente del artículo 2° “el costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración en las actividades industriales”. Nótese que la norma refiere a que la materia prima comprada por el contribuyente debe tener como posterior destino un proceso industrial.

Entonces, debemos preguntarnos qué tratamiento debemos darle al costo de la materia prima cuando la misma no tenga ese destino. Y nos estamos refiriendo al caso de materia prima que, por ejemplo, tenga por destino un proceso agropecuario. Recientemente la Comisión Arbitral tuvo la oportunidad de resolver un caso concreto, donde fue ventilado el problema que estamos comentando. Se trata de la causa Avícola Telos SA c/ Provincia de Buenos Aires.

Veamos los aspectos más importantes de la R. (CA) 11/2021 emitida en el citado caso.

a) Postura del Contribuyente

La accionante señala que la resolución determinativa efectuada modificó el coeficiente unificado correspondiente a la provincia de Buenos Aires, por entender que Avícola Telos SA no computó determinados gastos que debieron haber integrado el cálculo respectivo, puesto que, en virtud del criterio de la jurisdicción, dichos gastos revisten el carácter de “computables”.

Los conceptos cuestionados son: a) Productos veterinarios: son todos los productos incorporados para la preservación de la salud de las aves, y en la higiene y mantenimiento de los campos circundantes. Incluye: vacunas animales, antibióticos varios, bacitracina zinc, cloruro de colina, sal curb, larvicidas, pesticidas; b) Alimentos balanceados (alimentación especialmente diseñada para este tipo de aves utilizada en la producción de huevos); c) Trigo (alimento para las aves que mejora la calidad del huevo); y d) Gastos de

⁵ RG (CA) 7/2009. (BO: 28/09/2009)

⁶ RG (CA) 5/2017. (BO: 16/03/2017)

⁷ RG (CA) 5/2017.

⁸ RG (CA) 5/2012. (BO: 12/09/2012)

explotación de granja (referidos a acondicionar las instalaciones donde las gallinas son criadas, alimentadas, todo ello con la finalidad de que resulten aptas para la postura de huevos, según los estándares de calidad requeridos).

Indica que materia prima es aquel elemento utilizado en un proceso industrial y por la propia redacción del Convenio Multilateral (... se entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado) requiere de un elemento adicional: la incorporación física del bien o su agregado al producto final. Señala que si bien en el caso de Avícolas Telos SA no es posible hablar de una “maquinaria” que produce bienes industrializados, sí se puede considerar a su actividad como un proceso que necesita de “materias primas” que deben incorporarse para la obtención del producto final. En tal sentido, sostiene que los gastos descriptos refieren a los controles sanitarios, a la cura de enfermedades y prevención de otras, como asimismo a la alimentación de las gallinas afectadas a la producción de huevos. En este punto, si se toma en cuenta la descripción del Convenio Multilateral, no puede desconocerse que los insumos que integran los gastos a los que la fiscalización considera “computables”, sí se incorporan físicamente al circuito de producción, atento que para obtener huevos comercializables es necesario que las gallinas ponedoras tengan buena salud y hayan sido alimentadas conforme severos requerimientos que, de ser desconocidos implicarían, o bien un producto de calidad inferior, o bien un producto que no reuniría las condiciones de aprobación por parte de las autoridades alimentarias y sanitarias. Dice que tanto el alimento como la atención veterinaria, medicamentos e instalaciones adecuadas, inciden en la calidad final del producto, no ya de forma “mecánica”, pero sí “química”, pues el producto a comercializar en esencia, proviene de la gallina que lo pone, cuya constitución física incide directamente en el resultado.

b) Postura del Fisco de la Provincia de Buenos Aires

Surge de la resolución del caso que la ARBA realizó un ajuste a la firma Avícolas Telos SA como resultado de la incorrecta determinación del coeficiente de gastos; en dicho ajuste, consideró como gastos computables para la confección del coeficiente, las erogaciones identificadas por el contribuyente como: Productos veterinarios, Alimentos balanceados, Trigo y Gastos de Explotación de Granja, con fundamento en lo establecido en los artículos 3° y 4° del Convenio Multilateral. Indica que las erogaciones consignadas, no revisten la condición de “materia prima” en los términos del artículo 3°, inc. a), del Convenio Multilateral por no cumplirse con las condiciones allí establecidas, y por tal motivo resultan computables para el cálculo del coeficiente de gastos.

Afirmó ARBA que el artículo 3°, inc. a), del Convenio Multilateral cuando menciona que “no se computarán como gastos el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales...”, no contempla otra posibilidad más allá de la actividad que nombra expresamente, que es la “industrial”. En el presente caso concreto dado que se trata de la producción de huevos, claramente no hay una actividad industrial, no encontrándose, entonces, contemplado en la normativa la situación planteada en las presentes actuaciones.

Sostuvo además el Fisco que los conceptos involucrados no pueden ser catalogados como “materia prima” adquirida a terceros en los términos que menciona el artículo 3°, inciso a), del Convenio Multilateral, ya que deben encontrarse en su estado natural, es decir, sin modificaciones en su estructura. En este caso, se trata claramente de insumos necesarios para desarrollar un producto o servicio final, por eso son gastos que en el proceso de producción se consumen durante el desarrollo del mismo y que se utilizan para cumplimentar el mismo, pero no se corresponden con el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales.

c) Postura de la Comisión Arbitral

Conforme surge de la lectura de la resolución dictada por la Comisión Arbitral, se observa que la controversia radica en determinar si las erogaciones identificadas por el contribuyente como: productos veterinarios, alimentos balanceados, trigo y gastos de explotación de granja, resultan gastos computables o no, en los términos del artículo 3°, inc. a), del Convenio Multilateral.

Indicó la Comisión Arbitral que los organismos de aplicación del Convenio Multilateral tienen dicho que cuando la norma citada menciona “todo bien de cualquier naturaleza que fuera que se incorpore físicamente al producto terminado” se refiere a un bien que se confunde con el producto elaborado. “Incorporar” significa agregar, unir algo a otra cosa para que haga un todo con ella, es decir, hay confusión, sin que sea posible distinguir la previa existencia de uno u otro; mientras “agregado” es que se añade al producto, no se confunde con él pero forma parte del mismo. Los productos veterinarios, el alimento balanceado, el trigo, los gastos de explotación de granja necesarios para acondicionar las instalaciones donde las gallinas son criadas, no se conservan como tales en el producto final, forman parte del proceso de producción, pero no puede reconocerse su presencia a partir de un intento de desagregación física ni tampoco química, es decir, que en el producto terminado (en este caso los huevos) no puede advertirse la unión de estos bienes.

Por último, expresó la citada Comisión que corresponde destacar que el supuesto contemplado en el art. 3°, inc. a), del Convenio Multilateral, hace referencia a las actividades industriales, y así menciona que no se computaran como gasto “... el costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades industriales...”, excluyendo a todo otro tipo de actividades productivas, como es el caso de autos.

2.1.3 Materia prima adquirida a terceros destinada a la producción primaria y que posteriormente formará parte de un proceso de elaboración en las actividades industriales

Por último debemos preguntarnos cuál será la opinión de los Órganos del Convenio para el caso que el contribuyente despliegue dos actividades en forma conjunta: una de producción primaria que luego se integra a una industrial.

Así las cosas, imaginemos un contribuyente que tiene una plantación de naranjas y de la misma extrae la materia para su planta industrial de fabricación de jugos. En este caso, surge la inquietud de cuestionarnos acerca de si las materias primas que adquiere a terceros para la producción primaria de naranjas (fertilizantes, herbicidas, etc.) podrán tendrán el tratamiento de gastos computables, o no computables;

habida cuenta de que luego serán sometidas a un proceso industrial para obtener el jugo de naranjas y en tal actividad las materias primas resultarán un gasto computable.

2.1.4 Establecimientos agrícolas. Establecimientos ganaderos. Encuadre de ciertos insumos y/o compra de bienes

Son numerosas las situaciones que se pueden presentar en los establecimientos agropecuarios con relación a los insumos y/o compra de bienes que el contribuyente deberá proceder a encuadrar a la hora de confeccionar el coeficiente del artículo 2.

En el caso de una explotación agrícola que se dedique, por ejemplo, a la producción de soja; seguramente el productor deberá comprar semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc. Entonces, debemos cuestionarnos, que tratamiento tendrán los mismos conforme la resolución del caso concreto que estamos comentando. Entendemos que deberán recibir el tratamiento de “computables” a la hora de confeccionar el coeficiente del Régimen General.

En un establecimiento ganadero, destinado a la producción de ganado vacuno, el productor deberá clasificar en “computables” y “no computables” algunos de los siguientes insumos y/o compra de bienes: compra de ganado para su engorde, vacunas, medicamentos en general, etc. Tales adquisiciones encuadrarán como gastos “computables” para la confección del coeficiente del artículo 2.

2.2. Marolio SA c/ CABA

2.2.1 Introducción al problema

Marolio S.A. es un proveedor de bienes de consumo masivo, comercializa sus productos con cadenas de supermercados que operan a escala nacional. Se trata de un sujeto que desarrolla múltiples actividades (producción y comercialización de alimentos).

La empresa atribuía sus ingresos exclusivamente a la Provincia de Buenos Aires, por ser allí donde entregaba la mercadería en los centros de distribución de sus clientes. La AGIP impugnó este criterio, sosteniendo que la entrega en depósitos bonaerenses era meramente logística: el destino real de los bienes se hallaba en las distintas sucursales donde finalmente se vendían los productos, incluyendo CABA. En consecuencia, reclamó una porción del impuesto. La Comisión Plenaria, confirmando la decisión de la Comisión Arbitral, avaló la aplicación de un criterio basado en el coeficiente CM05 de los propios adquirentes, como “parámetro razonable” para aproximarse al destino final, aun cuando el proveedor no pudiera conocerlo.

Esta decisión implicó un salto metodológico de enorme trascendencia: por primera vez se admitió la atribución de ingresos de un contribuyente en función de los coeficientes declarados por un tercero, desplazando la prelación estricta del artículo 1 de la RG (CA) 14/2017⁹ y creando, de hecho, una “cascada de coeficientes”.

⁹ Resolución General (CA) 14/2017. (BO: 25/10/2017)

2.2.2 Las posturas

a) Postura del Contribuyente

Conforme surge de la R. (CP) 9/2025, Marolio SA sostuvo que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, en el presente caso no es posible establecer el destino final de los bienes –lo cual es incluso reconocido por los clientes sobre los cuales se practica el ajuste– establece un criterio que, lejos de seguir el orden de prelación de la Resolución General 14/17, intenta recrear o suponer dicho destino final aplicando un criterio no contemplado en la citada norma. Sostiene que se ha acreditado que ni los propios clientes pueden establecer el destino final de la mercadería, ni al momento de la compra-venta ni al momento de concretar la misma con la entrega de los bienes, por lo que mucho menos podría Marolio conocer el destino final donde los bienes serán utilizados, transformados o comercializados por sus clientes (transcribe la respuesta de Wal-Mart al contestar la circularización emitida por la AGIP). Por su parte, añade que la decisión adoptada por la Comisión Arbitral implica presumir el destino final de los bienes a partir de los coeficientes declarados por los clientes de Marolio, lo cual, encuadraría –según su interpretación– en el punto 2 antes citado; ahora bien, la norma citada por la propia Comisión Arbitral establece que ante la imposibilidad de determinar el destino final de los bienes debe adoptarse otro parámetro y no, ficticiamente intentar reconstruirlo en base a ellos. Destaca que los clientes de Marolio no cuentan con un domicilio en el que pueda razonablemente considerarse que desarrollan su actividad principal de manera centralizada, ya que se trata de cadenas de supermercados con presencia en numerosas jurisdicciones; en función de ello y continuando con el orden de prelación, al ser el domicilio de los centros de distribución de los clientes el único y último domicilio conocido por Marolio al momento de efectuar la entrega de mercadería, aplicó, razonablemente, el apartado 3 del inciso a) del art. 1° de la Resolución 14/17 que establece la atribución según “Domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se entregaron los bienes”.

b) Postura del Fisco de la CABA

La representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló, respecto del primer agravio planteado por el apelante (supuesta aplicación de un criterio contrario a la normativa aplicable) que, como fuera dicho en la contestación del traslado ante la Comisión Arbitral, al momento de la asignación de ingresos en el caso de venta de mercaderías, se debe tomar en consideración como factor determinante para atribución, el destino final del bien conforme la jurisdicción de la cual provienen los ingresos, atendiendo siempre al principio de realidad económica; dicho principio se encuentra claramente citado en la Resolución General CA N° 14/2017 y observa que la fiscalización realizó un muestreo del cual surgió que los principales clientes de la recurrente son Maxiconsumo SA, Wal-Mart SRL y Jumbo Retail Argentina SA respecto de los cuales la totalidad de las ventas fueron asignadas por Marolio SA a la provincia de Buenos Aires, pese a que los mismos cuentan con sucursales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido, si bien el fisco realizó una asignación en base a un parámetro que no fue validado por la Comisión Arbitral, coincide con dicho organismo de aplicación del Convenio Multilateral en el sentido que, aunque Marolio SA no sepa la proporción de mercaderías que tienen como destino a cada una de las jurisdicciones, la existencia de una

relación permanente y fluida con sus clientes le permite conocer con total seguridad que dicho destino no es exclusivamente la jurisdicción donde se ubica el centro de distribución de sus clientes; es más, la propia firma informa que “los productos comercializados por mi representada están dirigidos a un determinado sector de consumidores que no se encuentra distribuido de manera uniforme en el país”, corroborando la necesidad de utilizar un parámetro para su distribución.

Señala el Fisco que la presencia de supermercados operados por sus clientes en numerosas jurisdicciones, como reconoce la propia recurrente, no hace más que justificar, dice, el decisorio de la Comisión Arbitral teniendo en cuenta que la asignación exclusiva al domicilio del centro de distribución resulta irrazonable, lo cual motiva que deba necesariamente utilizarse un parámetro que resulte lo más cercano posible a la realidad económica teniendo en cuenta la actividad multijurisdiccional de sus clientes.

c) Postura de la Comisión Plenaria

Señala la Comisión Plenaria que corresponde señalar, en primer término, que el abordaje que realiza el contribuyente para tachar de arbitraria la resolución apelada, se fundamenta en una interpretación equivocada del texto legal, basada en la idea errónea de que el apartado 2 del inciso a) del artículo 1° de la Resolución General CA N° 14/2017 establece un domicilio único. Puede observarse que del texto legal no surge que el lugar o domicilio en donde se desarrolla la actividad principal deba ser único; interpretación que, además, fue confirmada por esta Comisión Plenaria en la Resolución N° 15/2023. Por otra parte, cabe precisar que la resolución apelada aplica los coeficientes como un método para proporcionar razonablemente el desarrollo de la actividad principal cuando esta es de tipo multijurisdiccional, lo que permite reflejar de manera más precisa la realidad económica. Cabe poner de resalto, que la mera discrepancia no convierte al acto recurrido en arbitrario: los argumentos del apelante en este caso solo reflejan una diferencia de criterios con los fundamentos contenidos en la resolución impugnada y cabe destacar que dicha resolución se sustenta en un análisis circunstanciado del caso y de la prueba obrante en la misma, proporcionando argumentos suficientes que excluyen cualquier planteo de arbitrariedad; por lo expuesto, en el caso concreto no ha existido arbitrariedad por parte de la Comisión Arbitral.

2.2.3 Nuestra opinión

Las conclusiones a la que llega la Comisión Plenaria no parecen del todo razonables. Y es que aplicar los coeficientes determinados en el CM05 por los clientes de Mariolio SA para distribuir los ingresos del Régimen General puede inducir a errores, entre los que podemos citar la distribución de “bases imponibles” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en jurisdicciones donde la empresa no desarrolle actividades y se desvirtúa el principio de legalidad tributaria, ya que se asignan bases imponibles sin sustento territorial ni actividad económica del contribuyente.

Propuestas

En el marco de las “XXIII Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias”, se recomienda:

- a) Sugerir a los Colegios, Consejos Profesionales y Federaciones (FACPCE y FAGCE) trabajar en conjunto con la Comisión Arbitral y la Comisión Federal de Impuestos, a fin de consensuar criterios técnicos.
- b) Promover el dictado de resoluciones generales interpretativas donde se regule el procedimiento de imputación de “gastos” a las jurisdicciones, en los casos que el contribuyente desarrolle actividades industriales y de producción primaria en forma conjunta y deba determinar el coeficiente del artículo 2 del Convenio Multilateral.
- c) Exigir a los Órganos del Convenio la aplicación de criterios claros a la hora de atribuir los ingresos para la confección del coeficiente del artículo 2 del Convenio Multilateral.

BIBLIOGRAFIA

Código Civil y Comercial de la Nación. (BO:01/08/2015).

Convenio Multilateral. (BO: 18/08/1977).

Convenio Multilateral. Comisión Plenaria. Resolución CP N° 9/2025 (Expte. CM N.º 1715/2022 “Marolio SA c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires”), San Salvador de Jujuy, 12/06/2025.

Convenio Multilateral. Comisión Arbitral. Resolución CA N° 11/2021 (Expte. CM N.º 1602/2019 “Avícola Telos S.A. c/ provincia de Buenos Aires”), Buenos Aires, 05/05/2021.

Di Paolo, Horacio. "El impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de Santa Fe": 1ª ed., ERREPAR, 2021.